



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Radicación: 05001-31-05-013-2004-01230-01
Demandante: ICBF
Demandado: SANTRA LTDA.
Asunto: Apelación sentencia que resuelve excepciones
Procedencia: Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Excepción de prescripción aportes parafiscales

Medellín, octubre siete (7) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte ejecutante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 10 de agosto de 2022, por medio de la cual se declaró probada la excepción de prescripción, dentro del proceso ejecutivo instaurado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” en contra de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES LTDA “SANTRA”. Radicado 05001-31-05-013-2004-01230-01.

1.- ANTECEDENTES

El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF”, por conducto de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva laboral, en contra de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES LTDA “SANTRA”, pretendiendo se libre mandamiento de pago por la suma de \$33.482.121, por concepto de aportes obligatorios ordenados por la Ley 7 de 1979, en las vigencias de abril a octubre de 1998 y de enero a diciembre de 1999, y por los aportes causados con posterioridad.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 27 de junio del 2000, libró mandamiento de pago a favor de la ejecutante por la suma de \$33.482.121, que se dividen en \$21.481.196 por la vigencia de abril a octubre de 1998 y \$12.000.925 por la vigencia de enero a diciembre de 1999, así como por los aportes causados y no cancelados desde esta última fecha hasta el pago efectivo.

Santra Ltda, dio respuesta a la demanda ejecutiva, oponiéndose a la acción y formulando las excepciones de inoperancia de interrupción de la prescripción; prescripción extintiva y las oficiosas.

2.- SENTENCIA DE DECISIÓN DE EXCEPCIONES

En audiencia pública celebrada el 10 de agosto de 2022, el Juzgado de conocimiento, profirió sentencia de conformidad con el numeral 3 del artículo 443 del Código General del Proceso, declarando probada la excepción de prescripción, ordenando la terminación del proceso, levantando las medidas cautelares decretadas y condenando en costas a la ejecutada.

3.- RECURSO DE APELACION

La apoderada de la ejecutante interpuso el recurso de apelación, indicando que su representada si realizó los requerimientos al deudor, a fin de interrumpir la prescripción del proceso, lo que ha efectuado año a año, a través del boletín de la Contaduría General de la Nación, lo que se traduce en que el término de los 5 años, se hubiere interrumpido año a año.

Adujo, además, en cuanto a la condena en costas impuesta a la ejecutante, que la misma no es procedente porque el ICBF no realizó un desgaste de la administración de justicia, ya que lo que estaba intentando buscar, era el pago de una obligación de carácter pública.

4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos, se pronunció el apoderado de la ejecutada, solicitando se confirme la sentencia de primera instancia, por cuanto el artículo 94 del CGP, establece la regla para que opere la interrupción de la prescripción, beneficio que se otorga con la notificación al demandado, del auto admisorio de la demanda, la que deberá hacerse en el transcurso de un año, carga que no cumplió la ejecutante, quien mostró un desinterés en el proceso, desde el año 2000.

Insiste en que en este caso se aplica el artículo 817 del Estatuto Tributario, que dispone un término de prescripción de 5 años, citando apartes de la sentencia CSJ STL 3387 de 2020, ello por tener los aportes al ICBF, una naturaleza parafiscal, considerando improcedente acoger el planteamiento esgrimido por la apoderada de la ejecutante, esto es, tener el cumplimiento de una obligación de las entidades públicas de reportar a los deudores morosos y las obligaciones pendientes de pago en el boletín de deudores morosos, como forma de interrumpir la prescripción.

5.- CONSIDERACIONES

5.1.- COMPETENCIA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

5.2.- PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a dirimir, radica en determinar:

¿Si es procedente revocar la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual se declaró probada la excepción de prescripción?

¿Si la publicación de la obligación ejecutada en el boletín de deudores morosos realizada por la ejecutante, tiene eficacia para interrumpir la prescripción?

5.3.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, i) en el sublite operó el fenómeno prescriptivo de la acción ii) la publicación en el Boletín de Deudores Morosos realizada por el ICBF, no interrumpe la prescripción, razón por la cual debe CONFIRMARSE la sentencia apelada, atendiendo a las siguientes razones:

5.4.- PREMISAS NORMATIVAS

Naturaleza del proceso ejecutivo laboral

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial, como en el asunto que se analiza.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.

En esta misma perspectiva el artículo 422 del código General del Proceso, establece:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

La excepción de prescripción

En esta Litis se pretende ejecutar, los aportes parafiscales cuyo pago omitió la ejecutada.

El Artículo 29 del Decreto 111 de 1996, define los aportes parafiscales como *“gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable”*

Tales aportes comprenden los pagos que por ley deben realizar los empleadores para contribuir al sostenimiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar, regulados en las Leyes 27 de 1974, 7ª. de 1979, 21 de 1982 y 89 de 1988.

Dada su naturaleza para fiscal los aportes al ICBF están sujetos a un término de prescripción especial, regulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que dispone:

“Artículo 817. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo 86. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. Inciso modificado por la Ley 1066 de 2006, artículo 8. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte”

A su vez el artículo 818 del mismo estatuto, reglamenta taxativamente los eventos de interrupción de la prescripción, en los siguientes términos:

“Artículo 818. Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 81. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: -La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. -La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario. -El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario”

De acuerdo con la norma citada la interrupción de la prescripción opera en los siguientes supuestos fácticos:

- Por la notificación del mandamiento de pago,
- Por la suscripción de acuerdo de pago,
- Por la admisión de la solicitud de proceso de reorganización, reestructuración o liquidación judicial, y
- Por la declaración oficial de la liquidación forzosa administrativa”

En el sublite, centra la parte recurrente su inconformidad, en que la a quo no tuvo en cuenta la interrupción de la prescripción, considerando que tal interrupción se configura año a año con la publicación realizada en la página de la Contaduría General de la Nación, Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Postura que no comparte la Sala en tanto el mencionado Boletín, de conformidad con el párrafo 3° del artículo 4 de la Ley 716 de 2001, modificado por el párrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el numeral 5° del Art 2° de la Ley 1066 de 2006, tiene por finalidad el saneamiento contable de las entidades públicas, quienes tienen la obligación de realizar semestralmente la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Prevén las normas citadas que las personas incluidas en el referido boletín no podrán tomar posesión en cargos públicos ni celebrar contratos con el Estado, sin establecer ningún otro efecto, en este sentido, dicho registro no constituye un requerimiento al deudor y por lo tanto no interrumpe la prescripción.

En esta misma perspectiva la publicación en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, no sustituye las acciones de cobro que deben realizar las entidades públicas para el recaudo de la cartera y específicamente que debía realizar la ejecutante para el cobro de las contribuciones fiscales adeudadas, de ahí que, al tratarse de aportes causados entre abril de 1998 y diciembre de 1999, no hay duda que el fenómeno prescriptivo se ha configurado

En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, tendiente a dejar sin efectos la decisión de la a quo consistente en declarar probada la excepción de prescripción en este proceso.

Sobre la condena en costas impuesta a la ejecutante

La parte activa de la litis, apeló de igual forma la condena en costas impuesta por la a quo, por considerar que, el propósito de la entidad es el cumplimiento de una obligación de carácter pública.

Frente a lo expuesto, se tiene que con arreglo al artículo 365 “1. *Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.*” Así las cosas, tal condena es una consecuencia procesal en virtud de haber sido vencida en juicio, por lo que no es posible exonerar a la ejecutante de la condena.

Corolario de lo antes planteado, encuentra la Sala acertada la decisión de la a quo al declarar probada la excepción de prescripción, ordenando el archivo del proceso y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares decretadas y en consecuencia, es procedente CONFIRMAR el sentencia ejecutiva recurrida.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000.

6.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley:

FALLA

PRIMERO: Se CONFIRMA la sentencia ejecutiva proferida el 10 de agosto de 2022, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” en contra de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES LTDA “SANTRA”.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000 moneda legal.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma estancada por salubridad pública
(Art. 11 Dec 491 de 2020)


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado